

Simon Guzman.—Luis María Aguilar,
secretario.

Son copias. México, Setiembre 24 de
1874.—*Enrique Landa.*

AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito
de Guanajuato por el C. Mariano
García, contra los procedimientos de
los Alcaldes populares 1º, 3º y 4º de
Guanajuato, que se han negado á ad-
mitirlo en el despacho de sus juzga-
dos, cuando representando en forma
derechos ajenos, ha comparecido ante
ellos en juicio.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que en escrito de 13 de Mayo del presente año, el C. Mariano García solicitó amparo de la Justicia federal contra los Alcaldes populares 1º, 3º y 4º de esta Capital, que fijaron un aviso en el local donde están situados sus juzgados, diciendo, que en lo de adelante no admitirían á las personas que intervinieran en los negocios que ante ellos se jiraban con el carácter de hombres buenos, agentes ó apoderados sin títulos, apercibiéndolos en caso contrario, con la aplicación de la ley vigente sobre tinterillos, con cuyo acto, el quejoso considera como violada en su persona, la garantía individual consignada en el art. 4º de la Constitución federal.

Como en el escrito de queja se solicitó además la suspensión provisional del acto reclamado, según manda el art. 5º de la ley de 20 de Enero de 1869, se pidió informe á los Alcaldes que se han mencionado, informando el primero que no admitía en su juzgado al C. García, gestionando en representación de otras personas, por considerarlo comprendido en la fracción 10ª del

art. 197 del Código penal del Estado, y en justo acatamiento de lo que dispone el art. 200 del mismo Código.

Los Alcaldes 3º y 4º en un mismo oficio informaron lo mismo, añadiendo que no comprendían como el C. García, sin quejarse de algun hecho que se hubiere cometido contra su persona en virtud del acuerdo que habian publicado, invocaba el art. 4º de la Constitución.

El Juzgado declaró que no habia lugar á decretar la suspensión del acto reclamado, porque el actor no habia fijado un hecho sobre que recayera la providencia, y se pidió á las autoridades, designadas como ejecutoras, los informes de que habia el art. 9º de la ley orgánica citada, que reprodujeron los que ya habian rendido, y de los que antes se ha hablado.

Durante el término probatorio, el actor amplió su queja, alegando como violados en su persona, además del art. 4º, los arts. 14 y 20 de la Constitución, y como pruebas exhibió unos certificados, de los que aparece: que los Alcaldes populares 1º, 3º y 4º no lo admiten en su Juzgado á gestionar como apoderado, y que lo han considerado como tinterillo, sin que haya sido alguna vez encausado por este delito, según las leyes del Estado.

Los Alcaldes 1º y 2º certifican además, que en los negocios que ante ellos ha girado, se ha portado con honradéz.

Se examinaron dos testigos que depusieron sobre los mismos hechos, dando uno de ellos como razón de su dicho, el haber sido el C. García su apoderado.

Supuestas estas constancias, el Promotor fiscal tiene que examinar si por las pruebas rendidas, aparece demostrada la violación de los arts. constitucionales que se han invocado.

El hecho principal que refiere el actor en su escrito de queja, está probado plenamente. Los Alcaldes 1º, 3º y 4º han rechazado en sus juzgados al C. Mariano García, cuando se ha presentado con el carácter de

apoderado, á gestionar á nombre de otras personas. Este hecho importa la violacion del art. 4º y 2º de la Carta fundamental de la República, en el primero de los cuales se garantiza la libertad de toda industria, trabajo ó ejercicio de alguna profesion, sin que á esto se oponga el art. 3º, como dicen los Alcaldes 3º y 4º, por que D. Mariano García no se ha presentado como abogado, sino como apoderado.

No por esto se crea que, á juicio del que suscribe, en la actualidad sea absolutamente libre el ejercicio de toda profesion, y aun de aquellas que en la época en que se promulgó la Constitucion de 57 necesitaban para su ejercicio un título, por que supuesto que la misma Constitucion en su art. 3º dice, que la ley determinará cuales sean estas, no ha querido que todas se ejerzan sin título. Lo contrario asienta el actor en sus escritos de queja y en su alegato, en el que se ha copiado parte de un pedimento fiscal, que se registra en la página 7 de la 2ª parte del tomo primero del Semanario Judicial.

Tambien se infringe el art. 28 de nuestra Constitucion, porque como ha dicho la Suprema Corte de Justicia en una ejecutoria análoga al caso presente, todo hombre tiene libertad absoluta para encomendar el giro de sus negocios en la persona que quiera, y pretender que solo sean apoderados los letrados, es crear un monopolio opuesto al art. 28 constitucional.

Los Alcaldes populares 1º, 3º y 4º, creen justificar su procedimiento fundándose en el art. 200 del Código penal del Estado, que les prohíbe admitir en sus juzgados á los tinterillos; bajo la pena de suspension de su encargo y de los derechos políticos de uno á dos años, debiendo entenderse por tinterillos, á los que subsisten exclusivamente de intervenir en los negocios judiciales, como hombres buenos, procuradores sin poder ó agentes sin título. Pero aun suponiendo estas disposiciones conformes con la Constitucion, han sido mal interpretadas por los Alcaldes populares.

El ser tinterillo constituye un delito segun las leyes del Estado, porque implica el delito de vagancia penado por las mismas leyes, y nadie puede ser reputado como autor de un delito, sin que haya habido una sentencia pronunciada por la autoridad competente, en que se ha declarado responsable de él.

Además, debe tenerse presente que los Alcaldes populares conocen de negocios en que no es necesario la intervencion de abogados, y que son incompetentes para juzgar á los vagos.

Respecto de los otros dos artículos que se han invocado, el que suscribe cree que no se han violado, por que los Alcaldes populares no han pronunciado una sentencia declarando tinterillo al C. García, sino únicamente, para fundar sus procedimientos, han hecho una calificación simple, que no importa una sentencia.

Resumiendo lo espuesto, se deduce: que los Alcaldes 1º, 3º y 4º al aplicar en el C. García el acuerdo que publicaron, prohibiéndole gestionar con poder de otras personas ante sus juzgados, han violado las garantías individuales consignadas en los arts. 4 y 28 de la Constitucion; en consecuencia, el Promotor fiscal pide que el Juzgado se sirva otorgarle el amparo de la Justicia federal que solicita.

Guanajuato, Julio 21 de 1874.—*José Aguilar y Córdova.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guanajuato, Julio 29 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Mariano García, contra el acuerdo de los CC. Alcaldes populares de esta Ciudad, publicado con fecha 5 de Diciembre de 1873, por el cual prohíben (fojas 5) la presentación en los Juzgados de los que como hombres buenos, agentes ó apoderados, intervienen judicialmente en los negocios allí seguidos, sopena de aplicar á los que se pre-

sentaron, la ley sobre tinterillos, acuerdo que segun la queja, viola el art. 4º de la Constitucion federal, más los arts. 14 y 20 posteriormente señalados como objeto del ataque. Vistos los informes rendidos; las pruebas producidas por el interesado, su alegato y el pedimento fiscal.

Resultando: que el C. García ha sido rechazado (fojas 8, 9, 14, 17, 18 y 19) en los Juzgados 1º, 3º y 4º, segun los informes oficiales, reputándole tinterillo, y por tanto, vago, con arreglo á las leyes del Estado, calificacion que no ha sido hecha judicialmente; declarando dos testigos, (fojas 23 y 24) conforme á la segunda pregunta del interrogatorio, (fojas 26) que esta negativa de las autoridades, ha sido por carcer el quejoso de título de abogado ó de agente de negocios.

Considerando: que en esta sentencia no hay para que examinar la necesidad del título de esta ó aquella profesion, ó el ejercicio absolutamente libre de ella; ya por que no consta que el C. García haya usurpado alguna, cosa criminal que no seria objeto de amparo, ya por que nada es mas constitucional que las profesiones necesariamente tituladas (art. 3º de la Constitucion en su parte 2ª) á pesar de lo que en contrario piensa el actor.

Considerando: que segun el art. 4º de la misma, todo hombre es libre para abrazar el trabajo honesto y útil que mas le acomode, sin mas que las restricciones allí señaladas; y que en esta virtud, debiendo estimarse trabajo honesto el representar judicialmente en forma derechos de otro, está comprendido en el artículo citado, siempre que, como sucede en el presente caso, no se haya incurrido en dichas restricciones.

Considerando: que no estando aun expedida por el Congreso de la Union la ley orgánica constitucional de ese artículo 4º, los Estados, al legislar sobre vagancia, pueden inscribirla entre los delitos, como lo ha hecho el Código penal del Estado de Guanajuato (tít. 3º cap. 1º).

Considerando: que estas facultades, en los términos dichos, son pertenecientes al régimen interior del Estado, pero que al derecho federal y no al derecho local atañe, que ningun ciudadano sea reputado delincuente, sino bajo las condiciones que aquel derecho de la federacion le garantiza.

Considerando: que en el Código del Estado que entre los vagos pone á los que como hombres buenos, ó agentes sin título ó apoderados sin poder, intervienen en los negocios judiciales, y tambien á los llamados tinterillos, y como tales vagos á todos los pena sin el acuerdo de los CC. Alcaldes, que proceden como si estas penas hubiesen sido aplicadas al promovente, constituye un ataque á las garantías individuales.

Considerando: que estos procedimientos son una infraccion del art. 14 de la Constitucion, que establece en que manera, por el derecho judicial respectivo, debe tener lugar la aplicacion de las leyes, el cual no se ha pronunciado en este negocio (fojas 17, 18 y 20) sino que simplemente hay una calificacion de dicho, cuyos efectos sin embargo, al ser rechazado el C. García en sus gestiones judiciales, quedan equiparados á los de una sentencia, de modo que tambien el art. 20 de la Constitucion, invocado en la queja, está realmente infringido, en tanto que falta la declaracion judicial.

Bajo este concepto, por las razones expuestas y de conformidad con lo pedido por el Ministerio público, este Juzgado falla: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Mariano García, contra los procedimientos de los CC. Alcaldes populares 1º, 3º y 4º de esta Ciudad, que se han negado á admitirle en el despacho de sus Juzgados, cuando representando en forma derechos ajenos, ha comparecido ante ellos en juicio.

Notifíquese á las partes, publíquese en el periódico oficial del Estado, y previa la citacion respectiva, remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos legales.

Así el C. Juez 1º suplente de Distrito, lo decretó y firmó. Doy fé.—*Indalecio Ojeda.*—*Luis G. Medina.*

Es copia que certifico. Guanajuato, Agosto 4 de 1874.—*Luis G. Medina.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 27 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por el C. Mariano García, contra el acuerdo de los Alcaldes populares 1º, 3º y 4º de esta Ciudad, publicado á 5 de Diciembre de 1873, por el cual prohíben la presentación en sus Juzgados, de quienes como hombres buenos, agentes ó apoderados, intervinieron en los negocios que se siguen en los juzgados referidos, conminándolos en caso de que se presenten, con aplicarles la ley sobre tinterillos, cuyo acuerdo, asegura el quejoso, vulnera en su persona las garantías á que se refieren los arts. 4º, 14 y 20 de la Constitución general.

Considerando: que según el art. 4º citado, todo hombre es libre para abrazar la industria, profesión ó trabajo que mas le acomode, siendo útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos, á menos que se le prive de esa libertad por sentencia judicial, en el caso de que ataque los derechos de tercero, ó por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando ofenda los de la sociedad; que representar en juicio á otra persona, no puede decirse que no sea un trabajo excluido de la letra y espíritu de ese artículo constitucional; que en el presente caso, el quejoso no está comprendido en las restricciones á que el mismo artículo se contrae.

Considerando también: que no está espedita la ley que el propio artículo anuncia; que tocando á la ley y no á los Alcaldes populares calificar quienes sean ó no tinterillos y determinar la pena en que incurran,

TOMO VI.—PARTE II.

caso que determine que es un delito ser tinterillo, y que por lo mismo, la calificación que los Alcaldes 1º, 3º y 4º de Guanajuato, han hecho de García teniéndolo como tinterillo y como vago, sin que se lo haya juzgado, vulnera las garantías á que se refieren los arts. 14 y 20 de la Constitución general.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo que previene el art. 101 de la propia Constitución, se decreta: que se confirma, por sus propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada á 29 de Julio próximo pasado, respecto de este juicio, por el Juez de Distrito de Guanajuato, que declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege al C. Mariano García, contra los procedimientos de los Alcaldes populares 1º, 3º y 4º de Guanajuato, que se han negado á admitirlo en el despacho de sus juzgados, cuando representando en forma derechos agenos, ha comparecido ante ellos en juicio.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el To- ca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzmán.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 9 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.